

La historia no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores: Un análisis de la transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal

David Rampf, David Castillo y Marcela Llano

IPS Artículo 4

Resumen

Particularmente en conflictos armados que siguen lógicas regionales heterogéneas, las soluciones negociadas deben responder también a las características del nivel subnacional y tener en cuenta las relaciones de poder de las regiones. Un ejemplo del peligro que albergan negociaciones que no siguen este principio es el caso, prácticamente desconocido, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los grupos insurgentes colombianos que se desmovilizaron a principios de la década de 1990, participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y buscaron posteriormente su camino a la arena política legal. Este artículo busca contar una de las historias no contadas del conflicto armado colombiano y presentar lecciones aprendidas, al analizar tanto las raíces, las bases ideológicas y las características del PRT, como el proceso de negociación y transición a actor político legal realizado por el mismo grupo. Tales lecciones pueden ser de alto valor en el contexto del actual proceso de negociación con las FARC-EP.

Sobre la publicación

Este artículo es parte del proyecto de investigación colaborativa “Evitando recaídas en el conflicto a través de acuerdos políticos incluyentes y construcción de Estado, luego de conflictos armados internos”, lanzado en febrero de 2013 por una duración de dos años. El proyecto de investigación apunta a examinar las condiciones necesarias para acuerdos políticos incluyentes luego de conflictos armados prolongados. Un foco específico del mismo es sobre antiguos actores armados contestatarios al poder que se convirtieron en líderes de Estado. El proyecto busca igualmente informar a formuladores de política a nivel nacional e internacional sobre prácticas efectivas para mejorar la participación, representación y capacidad de respuesta en la construcción de Estado y mejora de la gobernabilidad en escenarios de pos guerra.

Esta iniciativa es llevada a cabo en cooperación con instituciones socias en Colombia (coordinación del proyecto), Alemania (coordinación de investigación), El Salvador, Sudáfrica, Sudán del Sur, Aceh/Indonesia y Nepal. Los puntos de vista expresados en este artículo son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista y opiniones de la Berghof Foundation o CINEP/PPP.

Sobre los autores

David Rampf trabaja como investigador para el Equipo Iniciativas de Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, Colombia. Es coordinador del proyecto ‘Evitando recaídas en el conflicto a través de acuerdos políticos incluyentes’ y autor del estudio “Tendencias de la sociedad civil en Colombia”. Esta especializado en la participación de la sociedad civil en procesos de paz y procesos de transición de grupos insurgentes a actores de la política legal. Tiene una maestría en Ciencia Política, Antropología y Derecho Público alemán de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania.

David Castillo y **Marcela Llano** son estudiantes de Historia y Ciencia Política, respectivamente. Actualmente, trabajan como pasantes para el Equipo Iniciativas de Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, Colombia.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo del International Development Research Center en Ottawa.



Para citar el artículo: Rampf, David, David Castillo y Llano, Marcela 2014. La historia no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores: Un análisis de la transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal, Inclusive Political Settlements Artículo 4. Berlin: Berghof Foundation.

En internet: www.berghof-foundation.org. Este artículo está disponible en inglés.

Contenido

1	Introducción	5
2	Origen, ideología y características del PRT	6
3	Ruptura ideológica y negociaciones de paz	9
4	Entrando en la política nacional y regional y la primavera democrática del partido	13
4.1	Se cambian armas por curules: La participación electoral del partido	13
4.2	Una forma distinta de hacer la diferencia: La obra social de la ONG CORPADEC.....	15
5	La incidencia del proyecto político: El papel de la ADM-19 y la reacción de las élites regionales	17
6	Conclusión	20
	Bibliografía.....	21
	Entrevistas.....	22

Acrónimos y abreviaturas

ADM-19	Alianza Democrática M-19
ADO	Movimiento Autodefensa Obrera
ANC	Asamblea Nacional Constituyente
ANUC	Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
ASOPROPAZ	Unión Temporal Acción Humanitaria para la Paz
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CGSB	Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
CNG	Coordinadora Nacional Guerrillera
CPU	Comité por la unidad de los Marxistas Leninistas
CRS	Corriente De Renovación Socialista
CIS	Corriente De Integración Sindical
CORPADEC	Corporación por la Paz y el Desarrollo Comunitario
DDR	Desmovilización, Desarme y Reinserción
ELN	Ejército De Liberación Nacional
EPL	Ejército De Liberación Popular
ENO	Equipo Nacional de Operaciones
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FENASINTRAP	Federación De Empleados Públicos
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
FENANSIBANCOL	Federación Nacional de Sindicatos Bancarios
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
M-19	Movimiento 19 de Abril
MAQL	Movimiento Armado Quintín Lame
MIR-PL	Movimiento de Integración Revolucionaria – Patria Libre
MRT	Movimiento Revolucionario de los Trabajadores
PCC-ML	Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRT	Partido Revolucionario de Trabajadores Colombiano
SEDECO	Sindicato Textil Coltejer
SINTRAPOPOPULAR	Trabajadores del Banco Popular
TMLM	Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta

1 Introducción

Nosotros pensamos y decidimos que [...] podíamos a través de este proceso creer y crecer en la vía democrática para construir desarrollo con inclusión social y pluralismo político; que la dejación de armas [...] abriría espacios políticos para incidir de manera civilizada o racional en la solución de los problemas de la región y del país que por décadas no resuelve el Estado Colombiano ni la dirigencia política tradicional, sumiendo a los diferentes actores sociales en la desesperanza, la miseria y la violencia (PRT 2014).

La solución a los problemas regionales y nacionales, a través de su participación en la arena política legal, fue la expectativa del Partido Revolucionario de Trabajadores colombiano (PRT) en el momento de su desmovilización el 26 de enero de 1991. Sin embargo, el pasado 17 de julio, en el Foro Regional sobre víctimas convocado por el PNUD, una delegación del antiguo PRT hizo un balance sombrío de los años transcurridos desde que se arrojaron las armas del partido al Mar Caribe, al denunciar una campaña de exterminio realizada en contra de algunos ex miembros del partido. En lugar de la deseada y prometida puerta abierta a la política colombiana y de una verdadera oportunidad de cambiar las injusticias estructurales y el modelo del sistema político, el PRT, a su propio juicio, sólo encontró violencia y una cultura política excluyente. Frente a esta situación, y al culpar a la élite tradicional de la región de ser la principal autora de la campaña, la delegación planteó la cuestión de si en realidad es posible participar en la política colombiana, a nivel regional, después de un acuerdo de paz con el gobierno nacional (PRT 2014).

Esta experiencia de desmovilización manifiesta la importancia de que, en especial, en conflictos armados que siguen lógicas regionales altamente heterogéneas, como lo hace el colombiano, se exploren soluciones que respondan también a lógicas locales. Aunque remotamente nombrada en textos que no sobrepasan una página,¹ la historia del PRT, uno de los grupos guerrilleros que se desmovilizaron en Colombia entre 1990 y 1994, representa una fuente importante de lecciones aprendidas para futuros procesos de paz entre grupos insurgentes con enfoques primordialmente regionales y autoridades del nivel nacional. A pesar de haber contado con cierta influencia en otras regiones del país, el partido puso su enfoque tanto en la negociación de paz, como en el proyecto político previsto para el tiempo del post-acuerdo, en especial en departamentos de la Costa Caribe, como Atlántico, Bolívar y Sucre; aquellos lugares que tradicionalmente se han caracterizado por altos niveles de concentración del poder político y económico en manos de una pequeña élite regional. Debido a esto, durante las últimas cinco décadas la región ha sido el escenario de una movilización campesina intensa en búsqueda de reformas agrarias que así ha provocado respuestas violentas de la élite, la cual poco a poco formó estrechas alianzas con grupos paramilitares (González 2014, 14ss).

Con base en entrevistas y tres talleres con ex miembros de diferentes rangos del PRT y representantes de su antigua base social, realizados en Bogotá y Ovejas (Sucre), así como en una amplia revisión de diversas fuentes primarias, este artículo pretende arrojar luces sobre un capítulo desconocido de la historia colombiana y sistematizar la experiencia del PRT con el fin de analizar los diversos factores que llevaron a la relativamente poca incidencia de su proyecto político. Mientras que en un primer momento se reseñan los orígenes del partido en el maoísmo colombiano de la década de 1970 y se pone de relieve la ideología (inicial) y las características del PRT, la segunda sección se centra en el cambio ideológico que condujo a las negociaciones de paz y a la desmovilización final en 1991. Posteriormente, el documento analiza las expectativas de los miembros del partido proyectadas hacia el tiempo después de dejar las armas y subraya la participación exitosa inicial del PRT en la política legal. La cuarta y última sección, finalmente, analizan los factores que causaron que el proyecto político no alcanzara las altas expectativas.

¹ Ver por ejemplo: Jiménez (2003, 211); Isaza (1993, 144); Medina y Sánchez (2003, 403).

2 Origen, ideología y características del PRT

Las raíces del PRT se remontan a la gama de diversos movimientos de orientación maoísta en torno al Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), que formaron parte de la nueva izquierda latinoamericana, caracterizada principalmente por su crítica a los comunistas tradicionales (partidos y grupos armados) como reformistas. Al insistir en que sólo una verdadera revolución podía conducir a la dictadura del proletariado (como fin último), este sector ortodoxo de la izquierda revolucionaria colombiana rechazó la posibilidad de una convivencia pacífica de ideas capitalistas y socialistas, y por lo tanto, también todo tipo de participación en las instituciones burguesas. La mejor expresión de este principio fue una estricta política de abstención en cualquier tipo de elecciones (Archila 2008).

A finales de 1974, y debido a discrepancias sobre la ruta estratégica del partido, el PCC-ML experimentó una crisis interna, que dio lugar a la expulsión de la mayoría de sus miembros bajo el nombre de Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta (TMLM). Mientras el Comité Central del PCC-ML en este momento aún estaba siguiendo dogmáticamente el ejemplo de la revolución china de Mao, al subestimar la importancia de los sectores urbanos del proletariado y adherir a la lucha armada centrada en el campo como única estrategia capaz de dar lugar a una verdadera revolución, la TMLM cuestionó este principio rector, exigió una orientación más hacia la realidad nacional, que hacia otros países y criticó especialmente la desconexión del partido con los movimientos de protesta urbana, los cuales ganaron importancia durante la década de 1970. Aunque la Tendencia en su órgano de partido “Viraje” insistió en que “la resistencia violenta de la reacción marcaba el carácter violento de la vía hacia el poder que inevitablemente tendrían que transitar las fuerzas de la revolución” (Viraje 1979 18) y reconoció el importante papel del sector campesino en la revolución, también destacó particularmente la tarea esencial de vincularse más estrechamente con los movimientos de protesta urbanos (Flórez, entrevistas 2013; 2014a).

Al compartir principalmente sus discrepancias de opinión, frente a la posición del Comité Central y su orientación general maoísta, y a pesar de su esfuerzo por unir los dispersos grupos de orientación marxistas leninistas, pero sin contar con una estrategia común, la TMLM experimentó una serie de divisiones internas, poco después de haber sido expulsado del PCC-ML. Después de la división de un sector llamado Ruptura y del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), la Tendencia finalmente sufrió una segmentación entre una minoría y una mayoría. Mientras que la primera posteriormente se unió con el ‘Nuevo’ MIR y formó en 1984 el Movimiento de Integración Revolucionaria – Patria Libre (MIR-PL), que a finales de la década de 1980 entró al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fundó el PRT durante una conferencia en Sucre en 1982 (Archila 2008; Restrepo y Contreras 2000; Villarraga y Plazas 1994).²

Al menos inicialmente, el PRT se atuvo a sus raíces ideológicas y a la orientación maoísta de la TMLM. Por un lado, y de acuerdo con el enfoque maoísta del tipo ‘todo o nada’, la verdadera revolución que lleva a la creación de la dictadura del proletariado siguió siendo la meta general (y el objetivo mínimo) lo que significó que cualquier tipo de solución negociada y reformas fueron rechazadas. Cuando el Movimiento Autodefensa Obrera (ADO), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y, posteriormente, el Ejército de Liberación Popular (EPL) entablaron negociaciones con el gobierno de Betancur entre 1983 y 85, el PRT, junto con el ELN y otros grupos menores, rechazaron la iniciativa presidencial categóricamente como un “juego al propósito burgués” y “cualquier acuerdo que implique cesar la actividad operativa [como] una derrota y retroceso para el campo popular” (Viraje 1984, 11s). En este momento y en línea con la antigua retórica del PCC-ML, las FARC, por ejemplo, se entendieron despectivamente como traidores de la revolución.³

² A diferencia del MIR-PL y a pesar de su tradicional cercanía, el PRT se negó a entrar al ELN principalmente por su rechazo a la práctica de condenar de muerte a antiguos y actuales miembros por sus divergencias con la línea oficial. Sobre todo el asesinato de Ricardo Lara Parada, antiguo dirigente del ELN, en 1985 (según el PRT, a manos del mismo grupo insurgente), llevó al PRT a alejarse del ELN. Anteriormente el partido había intercedido a favor de Lara en la dirección del ELN (Flórez, entrevista 2013; taller 2014c).

³ Durante el V. Pleno del Comité Central del PCC-ML en 1973, integrantes del partidos llamaron a las FARC por ejemplo “una organización contrarrevolucionaria al servicio de los revisionistas y de la oligarquía Colombiana” (Villarraga & Plazas 1994, 92).

Por otra parte, la lucha armada aún se consideró la única estrategia capaz de lograr el objetivo general, como respuesta inevitable a un régimen político opresivo y excluyente, controlado por una pequeña élite colombiana e influenciada por las potencias imperialistas. Al seguir esta ideología, la estrategia del grupo se dividió principalmente en dos líneas de acción: en primer lugar, la agitación, la formación y la organización de las masas populares con el fin de atraer su apoyo para la revolución, en segundo lugar, y estrechamente relacionado con la primera línea de acción, la movilización de un ejército del pueblo que finalmente debía derrocar el aparato estatal controlado por las clases explotadoras (Viraje 1983; 1984).

De acuerdo con la primera línea de acción, el PRT siguió las orientaciones tácticas de la TMLM y buscó aumentar su influencia no sólo en el campesinado rural, sino también en los movimientos sociales urbanos. Mediante el fomento de las relaciones que se remontaban al TMLM e incluso al PCC-ML y a través de la conquista de nuevos simpatizantes, la organización logró alcanzar una influencia significativa en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), varios sindicatos, movimientos estudiantiles y en algunos barrios populares de ciudades como Medellín y Bogotá. Mientras que en la Costa Atlántica muchos líderes regionales de la ANUC se convirtieron al mismo tiempo en cuadros del PRT, otros miembros del partido ocuparon cargos en todos los niveles de las organizaciones sindicales, tanto a nivel regional como nacional, y en algunos casos, incluso en las direcciones de éstos. Entre otros, el partido contó con una fuerte influencia en el Sindicato Textil Coltejer (SEDECO), el Sindicato de Trabajadores de Anchicayá, ambas organizaciones regionales en Medellín y Cali respectivamente, y en sindicatos del sector bancario, como el de los Trabajadores del Banco Popular (SINTRAPOPOPULAR) y del Banco de Santander. Luego, miembros del partido ocuparon cargos en la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenansibanco). Igualmente, el PRT logró tener una influencia significativa tanto en la Federación de Empleados Públicos (FENASINTRAP) y en el Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo Cartagena (USO) como en uno de los sindicatos colombianos más grandes e influyentes, que es la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), e influir en comunidades indígenas, especialmente en la región del Cauca (Tobón, entrevista 2014; Cuello, entrevista 2014).

Con el fin de lograr una mejor armonización de su trabajo de masas, el partido estableció una organización central, la Corriente de Integración Sindical (CIS), formada por ejecutivos de direcciones sindicales nacionales, un dirigente campesino y un líder indígena vinculados en la clandestinidad al PRT. Más allá de sus tareas de coordinación, la CIS buscó a través de su periódico 'Integración' y, posteriormente, con su cercanía al movimiento democrático alternativo Colombia Unida construir puentes entre la acción clandestina del partido y las actividades de protesta y oposición legal (Cuello, entrevista 2014).

De acuerdo con la segunda línea de acción, la militar, el PRT buscó en el corto plazo la formación de pequeños grupos de autodefensa y milicias que en el largo plazo deberían convertirse en un ejército popular, mediante la articulación con grupos militares superiores (Viraje de 1984, 38). Al igual que en la TMLM, la aplicación de este segundo componente estratégico enfrentó, sin embargo, desde el inicio serias limitaciones, tanto de recursos económicos, como de capacidades técnicas. Tal situación impidió que a lo largo de los años 80, y hasta la desmovilización en 1991, la segunda línea de acción alcanzara el mismo impacto que la primera (Taller 2014c).

A pesar del discurso militar que el PRT utilizó desde su fundación, no fue hasta 1983 que el partido logró construir sus propias, aunque, todavía muy limitadas, estructuras militares, primero en la región del Cauca y Nariño y posteriormente, en los Montes de María. Mientras que las primeras estructuras tuvieron sus raíces tanto en los movimientos de reconstrucción después del terremoto de Popayán en 1983, como en algunas comunidades indígenas de la región del norte del Cauca, y fueron debilitadas tras enfrentamientos con el Frente XI de las FARC (Flórez, entrevista 2014a),⁴ la segunda experiencia se remonta a grupos de protección débilmente armados, del movimiento campesino local que ganaron importancia bajo el mando del comandante del PRT 'Pablo'. Dicha experiencia en Sucre y Bolívar logró cierta consolidación hacia finales de la década de 1980. Además de estas

⁴ De acuerdo con Enrique Flórez, antiguo miembro del Secretariado del partido, el intento de crear un frente en el norte de Cauca fracasó, entre otras razones, también por permanentes hostilidades con las FARC que mataron en un ataque al campamento del PRT 15 cuadros (Flórez, entrevista 2013).

estructuras armadas rurales, que conservaron en su mayoría el carácter de actor armado con poco impacto militar (Aguilar 2013, 147), el PRT mantuvo una estructura militar urbana responsable de tareas logísticas, llamado el Equipo Nacional de Operaciones (ENO). Con el fin de conseguir recursos, el ENO se vio comprometido, por ejemplo con una serie de robos a bancos y secuestros en Barranquilla, Medellín y otras ciudades (Barrios, entrevista 2014; Camilo, entrevista 2014; Del Rio, entrevista 2014).

Por consiguiente, el desarrollo y la influencia del brazo armado del PRT tiene que ser considerado como mínimo. Mientras que un ex miembro del Secretariado, al hacer un balance de la importancia real del brazo armado del partido, pone de relieve las experiencias militares como “una cosa muy poco significativa, con una marginalidad completa en el conjunto de lo que podríamos decir el movimiento armado colombiano que para la época ya tenía unas [...] expresiones tan fuertes como el EPL...” (Tobón, entrevista 2014), la organización en sí habló en el marco de una evaluación interna en 1990 de un “escaso desarrollo militar” (Viraje 1990, 53) y demostró con ello una vez más otra de sus características: la capacidad de autorreflexión que a menudo condujo a la autocrítica.

Desde el principio, el PRT mantuvo un animado debate interno acerca de la línea estratégica y del estado de la propia organización y de la izquierda revolucionaria colombiana en general. Por lo tanto, retomó, en cierto sentido, la tradición de dicho sector ideológico de debatir constantemente acerca de la manera correcta de desarrollar la revolución. Sin embargo, a diferencia de otras organizaciones, especialmente del campo ML, el partido toleró una discusión interna más o menos libre, sin expulsar fracciones, simplemente por sus opiniones divergentes (Del Rio, entrevista 2014a; Urueta, entrevista 2014B). Así, en varias ocasiones, evaluaciones críticas acerca de la condición del propio partido no sólo destacaron las limitaciones generales en ambas líneas de acción, sino también los problemas más específicos. Un ejemplo de ello fueron las críticas a las limitaciones de comunicación interna que afectaron la capacidad de liderazgo de arriba hacia abajo de la Dirección Nacional y que causaron, de tal manera, el hecho de que muchas de las operaciones fueran más iniciativas individuales de líderes regionales del partido, que parte de un plan de operación nacional coherente (Viraje 1984, 21). Así mismo, la inadecuada formación táctica e ideológica de los cuadros provocó otra discusión interna perpetua (Viraje 1984). En cuanto a la dirección estratégica y táctica del PRT y de la izquierda revolucionaria en general, la discusión se tornó especialmente alrededor del equilibrio óptimo entre el dogmatismo y el empirismo (Viraje 1983).

Otro aspecto que caracterizó al PRT durante su existencia es el llamado a la unidad de las fuerzas revolucionarias, tanto en el ámbito nacional como internacional, que se puede ver, por un lado, como una herencia de la TMLM⁵ y, por otro lado, como resultado de la fuerte influencia que sobre todo la revolución sandinista en Nicaragua y la exitosa experiencia del salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tuvieron en la izquierda colombiana. En esta línea de pensamiento, el sectarismo tradicional de la izquierda fue visto por el partido como uno de los mayores obstáculos en la ruta de la revolución (Viraje 1983; 1984, 15; Falla, entrevista 2014; Flórez, entrevista 2013). Aunque en un principio la iniciativa de buscar una articulación más estrecha de planificación y acción con otras organizaciones sólo se centraron en los movimientos revolucionarios cercanos al PRT, en términos de su respectiva orientación ideológica, como el MIR-PL y el ELN, el partido luego adoptó un enfoque más incluyente, con el objetivo de lograr una coordinación de todo el espectro revolucionario. Poco a poco, posturas pragmáticas prevalecieron sobre los paradigmas ideológicos anteriores.

En ese momento [al inicio] se le daba mucha importancia a la línea ideológica y política. Después eso va perdiendo importancia, pero en ese momento teníamos muchas discusiones teóricas y políticas sobre cuál era la línea y se pedía como prerrequisito para la unidad, que hubiera, digamos, afinidad ideológica y política. Después vamos minimizando los criterios para llegar a la unidad y terminamos discutiendo programas pragmáticos: llegar al gobierno etc. (Flórez, entrevista 2013)

⁵ A finales de los años 70, la TMLM creó el Comité por la unidad de los Marxistas Leninistas (CPU) con el fin de avanzar hacia la unidad de las dispersas organizaciones del Campo ML (Nuñez 1992).

Impulsado por este creciente pragmatismo, el PRT comenzó a construir fuertes lazos con el M-19⁶ y formó parte en cada coordinadora guerrillera durante la década de 1980 (Hernández, 1993). Por una parte, iniciativas como la Trilateral, la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) y, finalmente, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) debían unir fuerzas con el fin de maximizar su impacto militar, aumentar la presión sobre el régimen y con ello desestabilizar la hegemonía de las élites. Por otra parte, el PRT percibió internamente el enfoque colectivo y especialmente la correspondiente transferencia de conocimientos como una posible solución para las limitaciones internas. Con el fin de fortalecer sus propias capacidades militares, el partido participó, por ejemplo, en escuelas militares de la CGSB y del Batallón América⁷ (Taller 2014c).

3 Ruptura ideológica y negociaciones de paz

Desde su fundación, los grupos guerrilleros colombianos vivieron de cierto modo en lo que Zuluaga (1999, 2) llama una “época de utopías, en la que los sueños en torno a una futura e inevitable sociedad superior justificaba el recurso de la violencia”. La revolución fue percibida como inevitable e irreversible. Sin embargo, la década de 1980 se convirtió en el momento en que esta visión del mundo revolucionario entró en crisis. Diversas experiencias internacionales mostraron que la revolución no sólo era evitable, sino también que su resultado en muchos casos no era tan perfecto como se imaginaba y, a veces, también era reversible. Frente a esto, el PRT estuvo lejos de ser una excepción. Con los años, la ideología del PRT cambió gradualmente, en relación con la estrategia general del partido y sus objetivos. Este cambio ideológico era atribuible principalmente tanto a las evaluaciones respecto al contexto nacional e internacional, como a la condición de la izquierda revolucionaria en general.

Por un lado, y en la medida en que los dogmas ideológicos perdieron importancia, el PRT se desvió gradualmente del enfoque maoísta de tipo ‘todo o nada’ hacia una valoración de la posibilidad de una ‘simple’ reforma del sistema. En vez de luchar por la destrucción del régimen existente y la creación de una dictadura del proletariado sobre las cenizas del mismo, el partido cambió sus objetivos hacia una apertura de la democracia. Mientras que antes se había entendido la democracia, de acuerdo con la aproximación maoísta al concepto, más en un sentido socio-económico que uno político,⁸ el PRT ahora reclamó una reforma política que garantizara el derecho a participar libremente en las discusiones políticas y los procesos de toma de decisiones. El pluralismo político, un sistema eficaz de control y contrapesos entre los diferentes poderes, la descentralización del Estado, el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico del Estado colombiano y la protección de las libertades civiles y de los derechos políticos se convirtieron en elementos esenciales de la nueva agenda. Por otra parte, el partido al final de la década de 1980, comenzó a reivindicar una “economía mixta” en vez de una economía de planificación socialista. Aunque este nuevo concepto también implicaba el control estatal sobre sectores claves de la economía, tales como el agua, la energía, y el sector bancario, la nacionalización de por sí ya no era considerada como una “panacea” (Viraje 1990, 35) Bajo ciertas condiciones, la coexistencia de la propiedad privada y la propiedad estatal debería ser posible (Viraje 1990; Falla, entrevista 2014, Urueta, entrevista 2014a).

Según Flórez y Falla, ambos ex miembros de la Dirección Nacional del PRT, el cambio de objetivos se basó principalmente en las experiencias personales que algunos miembros del partido tuvieron en el extranjero. Mientras que Falla después de su viaje a Cuba comenzó a criticar la represión de opiniones divergentes por el régimen de Fidel Castro y empezó a destacar la importancia del pluralismo político y cultural (Falla, entrevista 2014), Flórez en cierta medida cambió su visión idealista de Cuba y Libia después de haber experimentado la

⁶ Según Flórez (entrevista 2014a), Carlos Pizarro planteó la posibilidad de una entrada del PRT al M-19. El primero rechazó la propuesta por divergencias tácticas respecto al rol de la lucha armada. El PRT criticó especialmente el enfoque del M-19 en la propaganda armada.

⁷ Al haber sido conformado por guerrilleros nacionales e internacionales, el Batallón América fue un proyecto del M-19 en búsqueda de crear un movimiento armado pan-americano.

⁸ Desde el enfoque maoísta se entiende democracia “más en el sentido socio-económico, como satisfacción de necesidades básicas, que en el sentido político como vigencia de las libertades ciudadanas” (Archila 2008, 174). Más que al acceso a la toma de decisiones, el concepto se refiere aquí a una justicia social.

realidad de la vida cotidiana en ambos países. Sobre todo la crisis económica que sufrió Cuba después de la retirada del apoyo financiero de la Unión Soviética, generó dudas sobre la verdadera cara del socialismo real (Flórez, entrevista 2014a).

El cambio gradual del objetivo iba de la mano con modificaciones respecto a la estrategia del partido. A medida que los nuevos objetivos que se planteaban no precisaban una total destrucción del viejo orden político y podrían alcanzarse posiblemente a través de reformas en el sistema político existente, la participación legal se convirtió poco a poco en una estrategia viable. En estrecha relación con el cambio de los objetivos, la lucha armada se hizo cada vez menos importante – un proceso que se apoyó así-mismo por una serie de experiencias nacionales e internacionales de la década de 1980.

Por un lado, desde la primera conferencia de la CGSB el PRT contó las limitaciones del enfoque de cooperación. Al contrario de las expectativas del partido, la coordinadora no era capaz de superar las divergencias internas de opinión entre sus integrantes, y mucho menos de conducir a una acción verdaderamente unificada.⁹ A lo largo de su existencia, el impacto militar quedó limitado, un hecho que llevó a algunos participantes incluso a admitir que la izquierda revolucionaria colombiana, después de casi tres décadas de lucha revolucionaria por medios violentos, no había sido capaz de alcanzar la misma capacidad destabilizadora que el cartel de Medellín había desarrollado en sólo pocos años (Flórez, entrevista 2014a). Junto con el auto-reconocimiento de las limitaciones financieras continuas que seguían impidiendo el fortalecimiento de las estructuras militares del partido, esta evaluación llevó a la conclusión de que la “perspectiva de una victoria por derrota militar no existe” (Viraje 1990, 48).

Nosotros éramos un grupo pequeño que no teníamos esa fuerza militar para convertir ese ideal de tomarnos el poder por las armas. Veíamos también que de parte de las otras fuerzas guerrilleras eso estaba como muy lejano. [Además,] ya se comenzaba a hablar de la elección popular de los alcaldes. Entonces yo ahí me convencí más [...] de que eso no tenía futuro. Uno podía durar mucho tiempo por allá haciendo cosas marginales, [...] subsistiendo desde el punto de vista militar, pero que eso nunca iba a trascender a lo que uno quería. (Del Rio, entrevista 2014a)

Por otro lado, el PRT percibió que la lucha armada perdía cada vez más su legitimidad, tanto dentro de la sociedad colombiana, como dentro de sus propias filas. En medio del fuego cruzado del conflicto acelerado entre el Estado y los barones del narcotráfico, y al vivir un número cada vez mayor de ataques de paramilitares y de la guerrilla contra políticos y líderes de la sociedad civil, muchos colombianos exigieron el fin de la violencia. Igualmente, las prácticas de la guerrilla, el secuestro y la extorsión, así como informes sobre excesos de violencia al interior de los grupos armados, como por ejemplo la masacre de Tacueyó¹⁰, y los rumores acerca de las conexiones entre algunos grupos insurgentes y el narcotráfico, destruyeron el ideal romántico de las guerrillas, que en ese momento de alguna manera todavía perduraba en algunos sectores de la sociedad (Fernández, entrevista de 2014; Urueta, entrevista 2014a). Incluso entre los miembros del partido, críticas acerca de las prácticas del PRT, como los robos a bancos y secuestros, se hicieron más fuertes (Del Rio, entrevista 2014a).¹¹ De tal manera, la fatiga pública de la guerra, cada vez más evidente, también influyó en las discusiones internas del PRT y en las evaluaciones que el partido hacía de la realidad nacional, como Falla (entrevista 2014) recuerda:

⁹ Según Flórez (entrevista 2014a) y Fernández (entrevista 2014), sobre todo el asesinato del candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, en octubre 1987, justo después de la primera reunión de los integrantes de la coordinadora, marcó el primer momento decisivo que provocó cambios hacia las expectativas del PRT frente a la CGSB. A pesar de la unidad simbólica de los grupos guerrilleros, la organización no fue capaz de mandar una respuesta militar frente al hecho.

¹⁰ Durante la Masacre de Tacueyó en 1985, 164 miembros del Frente Ricardo Franco fueron asesinados por sus propios comandantes tras haber sido acusado por ser infiltrados del ejército.

¹¹ Respecto a estas críticas internas, entrevistados recuerdan sobre todo el menosprecio que algunos cuadros sintieron por las alianzas puntuales que el partido y su ENO, al buscar un intercambio de conocimiento, en ocasiones mantuvieron con actores de la delincuencia común, como por ejemplo con la organización criminal barranquillera ‘Los Patojos’ (Cienfuegos, entrevista 2014; Del Rio, entrevista 2014a),

No, es que Colombia no aguanta más. Nosotros no podemos ser un combustible más de la guerra en Colombia; tenemos suficientes violencias con el narcotráfico, los paras, las autodefensas, con el ejército, la policía, con las guerrillas, o sea, no podemos darle más combustible a la guerra, sino que hay que quitársela.

En línea con las evaluaciones del contexto nacional, especialmente el progreso del diálogo de paz salvadoreño fomentó el reconocimiento del PRT sobre soluciones negociadas como una opción estratégica viable (Flórez, entrevista 2014a).

Con sus nuevos objetivos y su ajustada orientación estratégica, la posibilidad de diálogo con el gobierno fue adquiriendo poco a poco protagonismo en la agenda del PRT. Dicha actitud fue desde 1989 fuertemente apoyada por dos evaluaciones adicionales del partido sobre la realidad colombiana de finales de 1980: el éxito relativo del M-19 en la política legal y la oportunidad que brindaba la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

A principios de 1989, el M-19 había roto con la CGSB y entrado unilateralmente en negociaciones con el gobierno de Barco, hecho que se hizo oficial a través de una primera declaración conjunta el 10 de enero de 1989. Después de su desmovilización en 1990, la organización no sólo experimentó un importante respaldo público de parte de la sociedad, sino que también participó con bastante éxito en la política legal. Además de algunos cargos políticos a nivel local, el grupo desmovilizado obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes en las elecciones de marzo de 1990, sólo dos días después de su desmovilización.¹² En la percepción del PRT, esta experiencia marcó un paso significativo para los grupos insurgentes desmovilizados. Éxitos electorales, y por lo tanto una verdadera participación en la política, parecían ser alcanzable (Flórez, entrevista 2014a).

Por otro lado, hacia el final de la década de 1980, el partido comenzó a percibir ciertas rupturas dentro de la burguesía que llevaron a la identificación de al menos una facción abierta a cambios. Mientras que antes la posibilidad de formar alianzas con las elites se habían descartado categóricamente, el (fracasado) proyecto de reforma constitucional de Barco y más tarde el apoyo a la ANC de algunos políticos tradicionales eran consideradas ahora como señales de voluntad y un posible punto de partida. En este nuevo contexto, una renegociación del acuerdo político parecía ser una opción viable y la ANC la herramienta adecuada para ello (Flórez, entrevista 2014a; Viraje 1990).

Después de haber promovido inicialmente una negociación conjunta entre todos los miembros de la CGSB y la administración Barco (García 1992, 142), el PRT percibió con preocupación el creciente dominio de las FARC y la radicalización progresiva de la coordinadora guerrillera después de la salida del M-19. Como reacción a un comunicado del gobierno que cuestionó la verdadera seriedad de las anteriores propuestas de paz de las FARC, la CGSB cambió su enfoque en su V Cumbre en abril de 1990. Al apostar de nuevo por la lucha armada, la coordinadora provocó una división interna entre las FARC y el ELN por un lado, donde ambos rechazaron las negociaciones con el Estado y por el otro el EPL, el MAQL y el PRT, que por su parte siguieron insistiendo en la viabilidad de una solución negociada del conflicto armado (Villarraga 2009, 121ss).

De acuerdo con el segundo grupo, la ANC no era sólo una posibilidad para renegociar el acuerdo político excluyente a través de un pacto nacional incluyente, sino también merecía ser promovido por todas las organizaciones de la izquierda colombiana, incluidos ellos mismos. Por su parte, el PRT subrayó en varias cartas al gobierno, a la sociedad civil y a los líderes de los partidos que la ANC significaba una oportunidad histórica y expresó su pleno apoyo (PRT 1990a; 1990b).

Tras algunas aproximaciones iniciales entre el EPL, el MAQL y el PRT y el gobierno, las partes publicaron el 4 de junio de 1990 una declaración conjunta, proclamando el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno, el EPL, el MAQL y el PRT (Gobierno nacional, EPL, PRT MAQL y 1990). Por su parte, este último firmó dos meses más tarde, como resultado de una reunión con representantes del gobierno en el corregimiento de La Haya en el municipio de San Juan Nepomuceno un acuerdo que definió los términos y la agenda de la posterior negociación de paz (PRT 1990d). El PRT concentró la mayor parte de sus militantes en el campamento de negociación en La Haya

¹² Vera Grabe con 31.147 votos y Nelson Campo Núñez con 18.679 votos (Dirección General para la Reinserción 2000, 18s).

que en octubre del mismo año fue traslado al corregimiento de Don Gabriel en el municipio de Ovejas, con el fin de garantizar un acceso más fácil. Para este momento, el Secretariado ya había decidido, en contra de reparos de algunas facciones del partido,¹³ buscar seriamente una solución negociada del conflicto armado y aprovechar de este modo al máximo la histórica oportunidad política abierta por la ANC. Según Flórez (entrevista 2014a),¹⁴ en la percepción del Secretariado el presidente Gaviria quería mostrar resultados rápidos mediante la vinculación de la mayor cantidad posible de grupos insurgentes a la lista de desmovilizados.

A pesar de su autocomprensión como partido clandestino de alcance nacional y el carácter de negociación con el gobierno nacional, el PRT defendió desde el inicio de las negociaciones la importancia de un enfoque regional de al menos una parte de los aspirados acuerdos. En línea con esta postura, ya el preacuerdo de La Haya incluyó el tema de planes de desarrollo para las zonas de influencia en el itinerario de los diálogos. No obstante, y si bien el PRT intentó llevar tal enfoque a la práctica, a través de su incidencia para peticiones de los alcaldes de la zona de los Montes de María en la mesa o la convocatoria de una cumbre regional por la paz en noviembre de 1990 que buscó el diálogo con otros actores de la zona,¹⁵ el gobierno nacional se opuso a una participación directa de las autoridades locales en las conversaciones, con el argumento de que tal diseño no correspondía al grado de influencia real del PRT (Flórez, entrevista 2014b). Como consecuencia, pero también debido a la falta de interés por parte de las elites regionales, la negociación de paz se caracterizó principalmente por la ausencia de las mismas y se volvió para algunos entrevistados en una posibilidad perdida de solución de los conflictos históricos de los Montes de María en general y de reconciliación entre terratenientes y el movimiento campesino en especial (Barrios, entrevista 2014; Flórez, entrevista 2014b).

Si estas élites regionales hubieran querido resolver el problema, hubieran querido desarrollar soluciones económicas ahí, ni siquiera se hubiera necesitado la plata del gobierno. Se habrían podido estructurar proyectos conjuntamente que resolvieran la situación social de muchas zonas. [...] Pero ese [era] uno de los grandes déficits del proceso: No [hubo] un proceso real de reconciliación donde [...] participaran los sectores de poder con los sectores que [habían] sido excluidos del poder... (Flórez, entrevista 2014b)

Durante los meses siguientes, y aparte de otros temas relacionados con el proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), las garantías de seguridad, el indulto general para los desmovilizados y los proyectos concretos para promover los Derechos Humanos y el desarrollo regional en la Costa Caribe,¹⁶ el tema de participación política se convirtió en uno de los principales asuntos de la negociación.¹⁷ Por un lado, el PRT reclamó una representación directa en la ANC y resaltó de nuevo positivamente su carácter de “escenario para la configuración de un pacto político y social que abra el camino a las grandes transformaciones democráticas, económicas y sociales que necesita el país, sin las cuales sería imposible pensar en una paz estable y duradera” (PRT 1990d). Por otro lado, el partido exigió el apoyo gubernamental para el lanzamiento de su propio proyecto político y, en general, para establecer un entorno favorable, que permitiera la fundación y la participación de nuevas fuerzas políticas alternativas.

¹³ Muchos cuadros de las fracciones de Antioquia y Nariño se oponían a las negociaciones. De acuerdo con Gabriel Tobón, se opusieron al proceso de negociación ya que se veía más como el aprovechamiento de una coyuntura política que le permitía a un grupo armado una salida digna.

¹⁴ Sobre todo entrevistados de bajo rango critican retrospectivamente la falta de discusión interna respecto a la decisión de dejar las armas. Por su parte, el antiguo líder campesino y miembro del PRT Gabriel Barrios (entrevista 2014) incluso critica la falta de concertación con las bases sociales del partido.

¹⁵ Según Flórez (entrevista 2014b) muchos alcaldes de la zona vieron en las negociaciones adelantadas por el PRT primordialmente un canal de interlocución directa con el gobierno nacional. Más que un interés en la negociación como tal, la declaración de alcaldes, publicada el 15 de agosto 1990 (PRT 1990c), entre otras, buscó expresar inconformidades de los mandatarios locales con el plan de desarrollo para la Costa Caribe y solicitar recursos adicionales para sus respectivos municipios. Por su parte, la cumbre regional por la paz convocada por el PRT para el 19 de noviembre de 1990 tenía el propósito de “abrir espacios de acercamiento y diálogo en esta región (Montes de María)” (El Heraldo 1990).

¹⁶ A pesar de que en la lista de desmovilizados no aparece ningún antiguo integrante del PRT del Cauca, debido principalmente a los problemas de seguridad en ese momento, un acuerdo adicional definió algunos municipios del área como beneficiarios del Fondo Nacional de Paz (Flórez, entrevista 2014a).

¹⁷ Al igual como en las negociaciones de paz del EPL y MAQL, el tema de reformas políticas sustanciales fueron aplazados para la ANC (Villarraga 2013, 40ss).

Finalmente, asuntos relacionados con la participación política recibieron un lugar prominente en el acuerdo final de paz firmado el 25 de enero de 1991. Mientras que el primer punto del acuerdo otorgó el derecho a enviar un delegado a la ANC (aunque sin derecho a voto),¹⁸ los puntos dos a cinco definieron el apoyo estatal para la transformación proyectada del PRT en un partido político legal. Dicho apoyo se debería dar de dos maneras: la facilitación del reconocimiento legal y el apoyo financiero dirigido a la promoción pública del nuevo partido. Al seguir el ejemplo del M-19, el segundo tema incluyó, además de anuncios en medios de comunicación nacionales y regionales, la instalación de cinco Casas de la Vida en diferentes ciudades del país, con el objetivo de crear puntos de encuentro entre el partido y la sociedad colombiana (PRT 1991).

Un día después de que las negociaciones habían llegado a su fin, el PRT y la mayoría de sus miembros¹⁹ culminaron, durante una solemne ceremonia en Cartagena, el capítulo de su lucha armada y arrojaron sus armas al Mar Caribe.

4 Entrando en la política nacional y regional y la primavera democrática del partido

4.1 Se cambian armas por curules: La participación electoral del partido

Al igual que la discusión interna sobre la posibilidad de una solución negociada, las reflexiones sobre el camino futuro del PRT²⁰ hacia la política legal y su papel en el escenario de post-desmovilización fueron limitadas. A pesar de un consenso interno que subrayó la importancia de la participación política en general, también predominaba una divergencia frente a dos posiciones ligeramente diferentes sobre el enfoque planeado del partido que se remontaba básicamente a una discrepancia de expectativas. Mientras que algunos miembros antiguos (principalmente la antigua dirección del partido) se centraron en los cambios constitucionales y una transformación general del país – un objetivo que debía lograrse a través de la participación en la política nacional y en la ANC – otros buscaban especialmente una solución de los problemas puntuales a nivel local mediante la incidencia activa en la política regional. La participación en los gobiernos locales debía mejorar el acceso a los servicios públicos (educación, salud y vivienda,) de la base social del PRT y permitir la aplicación de reformas agrarias (Del Rio, entrevista 2014a; Zambrano, entrevista 2014). Como resultado, las diferentes posiciones sobre el ‘qué hacer’ después de la desmovilización llevaron a dos enfoques diferentes y contribuyeron a una división gradual entre los antiguos dirigentes nacionales del partido y sus antiguas estructuras regionales y la base social, en particular los de la Costa Atlántica.

Los promotores del enfoque nacional consideraron la adhesión del PRT a la Alianza Democrática M-19 (ADM-19) y la estrecha coordinación de José Matías Ortiz, delegado del PRT en la ANC, con la bancada del ADM-19, liderado por Antonio Navarro Wolff, el siguiente paso lógico. Aunque tanto el acuerdo de paz, como varias declaraciones de voceros del PRT durante el proceso de negociación podrían haber indicado la clara idea de transformar el PRT en un partido independiente, garantizando la conservación de su propia identidad política (El Tiempo 1991; PRT 1991), estas decisiones significaron una continuación del curso ya establecido antes de la desmovilización. Mientras que el objetivo postulado por la ADM-19, fue, la creación de un movimiento nacional

¹⁸ Para Flórez (entrevista 2013), la decisión del gobierno de aprobar solo un delegado sin voto para el PRT y el MAQL reflejaba sobre todo el temor de Gaviria de que la ANC podría ser dominada por fuerzas de la izquierda. Tal preocupación se basó primordialmente por el éxito inesperado de la ADM-19 en encuestas de opinión justo antes de las elecciones para la asamblea.

¹⁹ Tras su rechazo a las negociaciones de paz y a la desmovilización del PRT, una pequeña disidencia del partido continuó su lucha armada bajo el nombre Colombia Libre, aunque sin lograr un impacto significativo.

²⁰ Es importante resaltar que para algunos ex dirigentes no consideran que el PRT como proyecto político haya dejado existido con el acto de su desmovilización.

unificado de izquierda y de fuerzas reformistas de la política colombiana, coincidió con la reivindicación tradicional del PRT por la unidad, la decisión de unirse a la alianza representó además una continuación de la relación cercana del partido con Colombia Unida, miembro fundador de la ADM-19, que también se remontaba a la época anterior de las negociaciones de paz.²¹ En una carta del 15 de abril de 1990 a varios líderes de movimientos sociales y partidos que participaron en la fundación de la ADM-19, el PRT había expresado, además, su respaldo para el movimiento político emergente y su interés en el acompañamiento de la iniciativa, en función de observador (PRT 1990a). Por otra parte, la entrada a la ADM-19 era en cierta medida percibido como un paso bastante pragmático, debido al éxito abrumador del nuevo partido en las elecciones para la ANC en diciembre de 1990²² (Del Rio, entrevista 2014a; Flórez, entrevista 2013a).

Por su parte, muchos partidarios del enfoque regional estaban preocupados de que una disolución del PRT en la ADM-19 pudiera causar la pérdida de su identidad política propia y por lo tanto poner en peligro los vínculos con la base social del partido. Aunque, no se oponían en principio a la adhesión, y la gran mayoría de los antiguos cuadros del PRT que se lanzaron en las elecciones locales lo hicieron como candidatos de la ADM-19, muchos de ellos, sin embargo, continuaron identificándose como miembros del PRT e hicieron campaña bajo la bandera del partido desmovilizado (Barrios, entrevista 2014; Del Rio, entrevista 2014). Por ejemplo, el ex concejal de Barranquilla Jorge Urueta (entrevista 2014a) destaca: “Nosotros hicimos campaña a nombre del PRT. Yo fui elegido como concejal por el PRT, dentro de la ADM-19, pero era claro que era del PRT”.

Posterior a su desmovilización, el PRT logró una participación respetable en la política a nivel nacional, regional, y experimentó lo que (Flórez, entrevista 2014a) denomina su “primavera democrática”. Mientras que antiguos miembros del partido, como Flórez, Fernández u Ortiz ganaron cierta influencia en la dirección nacional de la ADM-19 y formaron parte de sus listas electorales para el Congreso, Ortiz, de acuerdo a su propio juicio, defendió con éxito la agenda del PRT en la ANC y logró posicionar propuestas claves en la nueva Constitución de 1991. Una muestra de ello fue por ejemplo la descentralización de la autoridad política (Ortiz, entrevista 2014). En 1994, Ortiz entró al Senado, aunque no como diputado de la ADM-19.

En el ámbito regional en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, ex miembros del PRT, por su parte consiguieron igualmente considerables resultados electorales en las elecciones municipales de 1992 y 1994. Al obtener 45.43% del total de los sufragios emitidos, el ex miembro del PRT Raúl Enrique Tovar Barreto fue elegido alcalde de Chalán (Sucre) y resultó ser el único candidato de la ADM-19 exitoso en las elecciones para alcalde en marzo de 1992 (Dirección General de la Reinserción 2000, 83).²³ En las mismas elecciones, otros cuatro desmovilizados del PRT entraron a tres consejos municipales de los departamentos de Atlántico y Sucre como candidatos de la ADM-19, uno de ellos fue Reinaldo Rivas, firmante del acuerdo de paz y antiguo comandante militar alias "Pablo". Dos años más tarde, siete antiguos miembros del partido ganaron escaños en diversos consejos municipales de la región – cuatro de ellos en el ámbito de la Circunscripción Territorial Especial de Paz, la cual se aplicó para la elección de un concejal adicional en determinados municipios, reconocidos por haber contado con una presencia histórica de los grupos desmovilizados resaltados en el Decreto 1388 del 1994.

Elecciones para concejales de 1992		
Castañada, Pedro	Galapa / Atlántico	ADM-19
Esmeral, José	Malambo / Atlántico	ADM-19
Pizarro, Jaime	Ovejas / Sucre	ADM-19

²¹ Con Gabriel Barrios, el PRT incluso contó, entre 1990 y 1992, con un representante en el concejo municipal de San Juan de Nepomuceno (Bolívar) por parte de Colombia Unida.

²² La ADM-19 ganó 26,7% de los sufragios emitidos en la elección para la ANC.

²³ La ADM-19 participó con un total de 87 candidatos propios en las elecciones.

Rivas, Reinaldo	Ovejas / Sucre	ADM-19
Elecciones para concejales de 1994²⁴		
<i>Barrios, Gabriel</i>	San Juan de Nepomuceno / Bolívar	
<i>Esmeral, José</i>	Malambo / Atlántico	ADM-19
Medrano, Never	Colosó / Sucre	ADM-19
Robles, Cesar	Colosó / Sucre	
Tovar, Eberto	Colosó / Sucre	
<i>Urueta, Jorge</i>	Barranquilla / Atlántico	ADM-19
<i>Zambrano, Carlos</i>	Baranoa / Atlántico	ADM-19

Tabla elaborada por los autores

Además de sus candidaturas propias, en algunas ocasiones desmovilizados del PRT también apoyaron las campañas electorales de la ADM-19 o de candidatos independientes. Como Del Rio (entrevista 2014a) recuerda, ex miembros del PRT apoyaron, por ejemplo, las campañas de Luis Miguel Vergara de León, quien fue elegido en Corozal (Sucre) para las elecciones de alcalde de 1992, y la de Apolinar Díaz Callejas, elegido gobernador de Sucre el mismo año.

4.2 Una forma distinta de hacer la diferencia: La obra social de la ONG CORPADEC

Adicional a su participación directa o indirecta en la competencia electoral, el grupo desmovilizado buscó llenar las diversas expectativas de otra forma. Al igual que los otros grupos insurgentes desmovilizados de la época y de manera promovida por el gobierno nacional, el PRT fundó su propia organización no gubernamental encargada de la administración de los recursos asignados para el proceso de reintegración. No obstante, durante los años 90 la Corporación para el Desarrollo de la Paz y de la Comunidad (CORPADEC) no limitó su trabajo al proceso de reinserción, sino que entendió su misión en un sentido más amplio como la promoción y la aplicación de: “proyectos de desarrollo social, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades, [a] generar procesos de participación y [a] aportar en la consolidación de la democracia en Colombia” (CORPADEC 1998, 2). En concordancia con la misión y al concentrarse no sólo en los antiguos miembros del PRT como beneficiarios, sino también en toda la población de sus áreas de influencia, la ONG se convirtió así en una herramienta para mantener el vínculo entre el PRT y sus antiguas bases, para aumentar su influencia en la región y poder sacar provecho político de esta. (CORPADEC 2000; Del Rio, entrevista 2014b).²⁵

Nosotros crecimos en CORPADEC [...]. O sea, cuando hicimos la negociación con el gobierno teníamos unas influencias comunitarias, pero luego con CORPADEC nosotros logramos que eso creciera. Logramos llegar a más sectores. Logramos vincular a más personas que no eran del PRT, pero que sí nos reconocían nuestro liderazgo. (Del Rio, entrevista 2014b)

²⁴ Los candidatos en letra cursiva fueron elegidos por Circunscripción Especial de Paz. En Marzo de 1994, el gobierno adoptó el decreto de la ley 163 de 1994 en el artículo 15 con el que aprueba una Circunscripción Especial de Paz que le concedía favorabilidad política a los grupos desmovilizados para acceder a los concejos municipales.

²⁵ Adicionalmente, en algunas ocasiones, la ONG apoyó en la financiación de campañas electorales de antiguos miembros del PRT (Urueta, entrevista 2014a).

Tras su fundación, y de acuerdo con su misión, la ONG implementó, sobre todo en la Costa Caribe,²⁶ proyectos de capacitación de líderes comunitarios y de resolución de conflictos. Con fondos del Estado, fueron diseñados e implementados además una serie de proyectos económicos. Con el fin de apuntar a la transformación de la cultura política (con frecuencia violenta) del país, la socialización de valores de la paz y de los derechos fundamentales de la nueva constitución se volvieron puntos importantes de la agenda. Particularmente el proyecto *Ciudadelas para la Paz*, promovido por el desmovilizado Héctor Rivas, creó un impacto considerable en la región, al construir cientos de viviendas sociales en los municipios del Carmen de Bolívar, Cartagena y San Juan de Nepomuceno, entre otros (Arrieta 2006 ; Del Rio, entrevista 2014b).

Fue en el trabajo de CORPADEC, que por primera vez en la historia del PRT el enfoque de género adquirió importancia y rompió con el carácter tradicionalmente machista de la organización. Antes de la desmovilización, la participación e incidencia de las mujeres en el partido clandestino, e incluso en las negociaciones de paz, habían sido notoriamente escasas, prueba de esto es que ninguna de ellas llegó a la Dirección Nacional ni mucho menos al Secretariado. Según Flórez (entrevista 2014b), esta situación puede ser explicada por las estructuras sexistas que persisten aún en la composición socio-cultural colombiana, que no excluían a los proyectos políticos de izquierda de la época, y por la herencia machista que traían desde el PCC-ML.

A pesar de que ninguna mujer formó parte del equipo negociador, las mujeres del partido lograron poner de precedente algunas de sus inconformidades respecto al acuerdo de paz, derivadas en su mayoría de la falta de un enfoque de género en el programa de reintegración, y de las necesidades inminentes que se presentaban en las familias²⁷ de las y los desmovilizados durante y después de las negociaciones, tal como lo relata Flórez (entrevista 2014b):

“...empiezan a luchar por incorporar una perspectiva de género, [yo diría que] la primera expresión de eso también estuvo ligada a reconocer que la desmovilización no se podía limitar a los guerrilleros sino que había que involucrar a las familias... de hecho esa demanda por involucrar a las familias empezó porque [las mujeres] se sentían excluidas, entonces las compañeras de los que estaban en la lista reclamaban también beneficios de desmovilización para sus hijos, para ellas mismas y empezó toda una lucha por el núcleo familiar...”

Ahora bien, el momento de mayor incidencia y donde se hace más visible la participación de las militantes del PRT, se da en el desarrollo y trabajo político que realizaron dentro de CORPADEC; ya que presionadas por la necesidad de empoderarse y al entrar en contacto con el movimiento de mujeres y grupos feministas (Flórez, entrevista 2014b), empezaron a generar propuestas de organización para ellas mismas, sus familias y las mujeres de las zonas donde el PRT tuvo presencia, principalmente en los Montes de María y otros municipios de la Costa Atlántica.

En uno de sus órganos de difusión, CORPADEC-Área Mujer, la ONG dió cuenta de los pilares de su trabajo y de algunos de los proyectos que gestionó y realizó en la región. Así pues, su trabajo fue fundamentado bajo tres ejes: perspectiva de género, fortalecimiento organizativo con enfoque autogestionario y generación de actividades específicas que respondieran a necesidades concretas, esto con el fin de fortalecer y empoderar los liderazgos femeninos, generando mayores niveles de incidencia de las mujeres en sus comunidades y de lograr niveles más altos de interlocución con las instancias gubernamentales de la región.

Entre los proyectos del área de mujer, el más destacado fue el trabajo adelantado con madres comunitarias²⁸ pertenecientes a varios municipios de la Costa Atlántica, incluidos 12 barrios de Barranquilla, y algunas

²⁶ Aunque sus proyectos se enfocaron sobre todo en la Costa Caribe, CORPADEC también contó con oficinas en Cali y Pasto.

²⁷ La importancia de la problemática familiar radica también en que tal como lo identifican FUCUDE y ASOPROPAZ, el entorno cercano de las y los desmovilizados se vio afectado por la persecución, amenaza y demás hechos de violencia que padeció la población desmovilizada de los años 90; siendo víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como asesinatos, desplazamientos forzados, desaparición forzada, entre otros (FUCUDE & ASOPROPAZ 2006, 69ss).

²⁸ El principal objetivo de este proyecto fue fortalecer los conocimientos de las Madres Comunitarias en pedagogía, seguridad social y perspectiva de género.

asociaciones de Bogotá que dio como resultado la producción de la cartilla “Construyamos entre todas las madres una propuesta pedagógica”.²⁹

Aunque el trabajo del área de mujer fue secundario en comparación con las otras líneas de trabajo de CORPADEC, las mujeres también implementaron proyectos con campesinas que tenían como principal objetivo fortalecer sus lazos organizativos y aportarles conocimientos en áreas de generación de proyectos económicos y conocimiento de sus derechos con visión incluyente. De igual manera realizaron foros y talleres que buscaban cuestionar el estado de los programas gubernamentales en el tema de mujer en la región, resultando la propuesta de crear una Oficina para la Mujer en Atlántico.

5 La incidencia del proyecto político: El papel de la ADM-19 y la reacción de las élites regionales

A pesar del éxito prometedor que CORPADEC y algunos ex miembros del partido pudieron alcanzar durante los primeros años después de su regreso a la vida civil, el balance que el PRT hizo algunos años más tarde sobre la situación encontrada tras su desmovilización resultó ser negativo. Si bien los desmovilizados reconocieron en 1998 que la “constituyente del 91 [había creado] bases legales e instrumentos iniciales para avanzar en la democratización del país y en la construcción de una paz con justicia social” (CORPADEC 1998, 7), también argumentaron que “la pluralidad política [y] la profusión de movimientos cívicos [...] quedaron absorbidos por la hegemonía política [de las élites] de siempre” (CORPADEC 1998, 9). Desde el punto de vista de muchos de los entrevistados, el proyecto político del PRT enfrentó especialmente dos factores que finalmente llevaron a su relativo fracaso y a esta evaluación negativa: la estructura interna centralizada, y con un mayor enfoque a nivel nacional que regional, de la ADM-19; y el contexto hostil con el cual muchos nuevos protagonistas de la política regional (y también de CORPADEC) fueron confrontados.

Por un lado, y de acuerdo con antiguos promotores del proyecto político del partido en la arena política regional de Sucre y Bolívar, como Astolfo, Barrios y Del Río, el hecho de formar parte de la ADM-19 y por lo tanto la obligación de aceptar y seguir decisiones y directrices internas que a menudo se tomaron a nivel nacional, en varias ocasiones se volvió en vez de una ventaja más bien un obstáculo. Especialmente, la indiferencia por parte de líderes de la alianza frente al contexto regional y a las bases de apoyo tradicionales, con las cuales el PRT y otros integrantes del movimiento contaron, junto con la estructura organizativa vertical que generalmente obstaculizó una incidencia de las estructuras locales en la toma de decisiones a nivel nacional, condujeron a decisiones fuertemente cuestionadas,³⁰ afectando a menudo el proyecto político regional de los desmovilizados. Al respecto, algunos entrevistados destacan por ejemplo, experiencias en las cuales los candidatos del PRT, con una buena reputación en la región, tenían que competir por su posición en las listas electorales del partido con candidatos en gran parte desconocidos, nombrados directamente por Navarro Wolff (Astolfo, entrevista 2014; Del Río, entrevista 2014a). Barrios (entrevista 2014) incluso se acuerda para el caso de San Juan de Nepomuceno, de una reunión entre el líder de la ADM-19 y promotores del paramilitarismo en la región, con el fin de explorar posibles alianzas electorales.

Por su parte, desmovilizados del PRT, que en ese momento estuvieron cerca de la dirección nacional de la ADM-19, como Flórez y Ortiz, no lograron incidir a favor del proyecto político regional de sus antiguos camaradas - un hecho que aumentó aún más la división entre los protagonistas regionales y sus líderes anteriores que, en la

²⁹ Se produjeron 7000 ejemplares que sirvieron como herramienta de organización y movilización de las Madres Comunitarias en torno a sus reivindicaciones.

³⁰ Según Fernández (entrevista 2014), dentro de la ADM-19 prevaleció sobre todo el liderazgo autoritario de Navarro Wolff, quien normalmente insistió en tener en decisiones importantes la última palabra. También por esta hegemonía interna, del antiguo comandante del M-19, quien al preferir un enfoque nacional por encima de un enfoque diferenciado regional con frecuencia ignoró características regionales, Ortiz decidió salir de la dirección nacional de la alianza y volverse a la política regional de Barranquilla (Ortiz, entrevista 2014).

percepción del primer grupo, “dejaron [las bases] huérfanas desde el punto de vista de un liderazgo político” (del Rio, entrevista 2014a).³¹ En este sentido, los espacios adquiridos en la política nacional no sirvieron para apoyar el proyecto político a nivel regional ni fueron utilizados para promover el trabajo de la ONG. “Cuando Matías [Ortiz] era Senador, no fue un Senador de puertas abiertas para nosotros. Yo recuerdo que [...] cuando uno iba allá no era que uno encontraba un ambiente de puertas abiertas [...]. No pusieron ese Senado al servicio de consolidar unas ideas políticas” (Del Rio, entrevista 2014a).

Tal sensación de abandono de amplios sectores de la antigua base social y de los desmovilizados de bajo rango, no se limita sólo al liderazgo político, sino que se refleja también en el balance transversal que estos grupos hacen del proceso de paz y reintegración como tal. Al argumentar con indignación que: “aquí en los Montes de María la dirección política no hizo nada por nosotros” (Taller 2014b), un grupo de entrevistados de Ovejas (Sucre), por una parte, expresa sus expectativas frustradas, ya que el proceso de paz y la firma del acuerdo final, en el corregimiento de Don Gabriel de su propio municipio, no lograron traducirse en cambios concretos en términos de infraestructura y calidad de vida, y por otra parte, también muestra implícitamente, que para muchos cuadros el proyecto colectivo (lo común) no había terminado con la desmovilización del partido. A pesar de que el proceso de transición a la vida civil fue diseñado como un proceso individual, de transformación de guerrilleros en ciudadanos,³² la esperanza de muchos participantes se centró en un proyecto colectivo con cierta orientación por parte de sus antiguos líderes. El hecho de que dichas expectativas no hayan sido cumplidas, junto con la impresión de que los antiguos comandantes disfrutaron una situación mucho más acomodada tras la desmovilización, profundizó la división entre antiguos líderes y sus bases sociales, caracterizada por desconfianza y desilusión.³³ “Entonces la dirigencia abandona a las masas y las masas ya se ponen incrédulas. No creen en nadie porque si un jefe de esos, que fue amigo personal que comió [...] con uno, y luego darle la espalda de esa manera” (Taller 2014b).

Por otro lado, y con mayor fuerza desde 1994, la participación tanto de desmovilizados del PRT, como de candidatos de la ADM-19 o de otros movimientos, en la política regional y las acciones de CORPADEC se encontraron claramente afectadas por el contexto hostil de la región de la Costa Atlántica que durante la década de 1990 mantuvo e incluso reforzó su modelo tradicional de exclusión política, económica y social (violenta) de sectores que amenazan supuestamente la hegemonía de las elites regionales. En especial, desde finales de los años 1960 y 70, y como reacción a una postura radical asumida por la llamada línea Sincelejo de la ANUC, que buscó la organización del campesinado con el fin de lograr una verdadera reforma agraria, el miedo de las elites regionales de perder sus privilegios económicos y políticos condujeron a la utilización de medios violentos con el fin de conservar el statu quo (González 2014; Porras 2014, 358).

Posteriormente, partes de estas elites promovieron la creación de pequeños grupos armados responsables de responder a las tomas de tierras, con frecuencia dirigidas por la ANUC, y para llevar a cabo el asesinato selectivo de líderes campesinos con el objetivo de desarticular sus movimientos. Particularmente, en el contexto del proceso de descentralización política de finales de los años 80 y del ascenso de la Unión Patriótica, esta dinámica alcanzó nuevas dimensiones debido a una alianza tripartita entre las élites tradicionales de la zona, algunos sectores del ejército y un actor nuevo, a saber, los narcotraficantes, los cuales se convirtieron gradualmente en terratenientes importantes de las regiones. A pesar de que las élites tradicionales participaron en el surgimiento de grupos paramilitares en casi todas las regiones del país, la alianza mencionada fue particularmente fuerte en los

³¹ Por su parte, Flórez (entrevista 2014a) destaca la insistencia con la cual intentó incidir, casi siempre en vano, en Navarro en favor del proyecto político regional de sus camaradas.

³² A pesar de algunos proyectos empresariales colectivos, predominó un enfoque individual en el programa de reinserción, el cual proporcionó a desmovilizados beneficios (individuales) como el indulto, un auxilio de sostenimiento inicial, niveles de escolaridad, atención en salud y acceso a créditos productivos (Villarraga 2006, 50s).

³³ Es esencial resaltar que sobre todo en la interpretación de qué significó para el PRT el proceso de desmovilización y la entrada a la ADM-19, se puede encontrar claras divergencias entre las posturas de las bases y antiguos miembros de bajo rango, por un lado, y desmovilizados de la antigua dirección nacional por el otro lado. Desde el punto de vista de Flórez, por ejemplo, el proyecto PRT se ha terminado evidentemente con la disolución del partido en la ADM-19 (taller 2014c). Aunque el antiguo líder también argumenta que el enfoque individualista del programa de reinserción era un error y subraya la necesidad de que procesos de DDR tengan una fase de transición, Flórez percibe semejante fase, a diferencia del primer grupo, claramente como una disposición transitoria (Flórez 2014a).

departamentos del norte de Bolívar, Córdoba y Sucre (y en la Costa Caribe en general), donde algunos de los miembros tradicionales no sólo financiaron y se beneficiaron de acciones de los paramilitares, sino que también se convirtieron en integrantes de las estructuras del paramilitarismo (González 2014, 29; Verdad Abierta a).

En este contexto, y a pesar del hecho que durante el proceso de negociación y justo después de la desmovilización una serie de anuncios públicos de políticos regionales, como por ejemplo el de la gobernadora de Sucre Luz Mariana Ojeda de Pinto, habían señalado una disposición general, de por lo menos algunas partes de las elites regionales, para dar la bienvenida al PRT en la vida civil (El Tiempo, 1991), el proyecto político del PRT, sus promotores y sus familias se encontraban en el centro de una campaña violenta contra todos los grupos desmovilizados de la región. Tal situación provocó el desplazamiento de la mayoría de sus miembros de la zona rural a los centros urbanos, como el ex miembro del PRT Robinson Arrieta (2006) recuerda. Muchos desmovilizados del PRT que se habían lanzado a la política e incluso habían sido elegidos en cargos políticos entre 1992 y 1994, los promotores de proyectos de CORPADEC y simples simpatizantes del partido recibieron amenazas de muerte, algunos abandonaron la región y otros fueron asesinados. En su declaración remitida en “*El Tercer Foro de Víctimas en Barranquilla*” convocado por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, una delegación de desmovilizados del PRT presentó una lista con 61 casos de compañeros asesinados sólo en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre; entre ellos tanto el ex alcalde de Chalán Raúl Tovar, sus hermanos Eberto y Jhony Tovar, como el ex concejal Reinaldo Rivas y su sobrino, promotor de CORPADEC y director de la EPS Mutual Montes de María,³⁴ Hector Rivas (PRT 2014).

Todos los entrevistados califican estos sucesos traumáticos, retrospectivamente, como una “política de exterminio” (Astolfo, entrevista 2014) o “genocidio” (CORPADEC 2000; PRT 2014; Urueta, entrevista 2014a), diseñado por las élites regionales y ejecutado por grupos paramilitares - una interpretación que después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y 2006 fue apoyado por una serie de confesiones judiciales de ex paramilitares de la región de Sucre y Bolívar, como alias ‘Javier’ entre otros (Verdad Abierta b).

Nosotros le generamos a la élite de Sucre una preocupación. [...] Entonces la clase política de Sucre hizo una lectura de eso[...] y con un nivel de cultura política muy bajo como para entender esos procesos de aceptar las diferencias y de aceptar que nuevas fuerzas políticas puedan surgir, con fuertes lazos con el latifundio, con la corrupción, que habían hecho de la corrupción una fuente de enriquecimiento patrimonial, pues veían que sus intereses podían estar amenazados si eso crecía. Esa clase política comenzaba a hacer un proceso de alianza con fueras paramilitares. (Del Rio, entrevista 2014a)

Aunque esta respuesta violenta contra la naciente fuerza política siguió en cierta medida el modelo tradicional de exclusión, su dimensión, para muchos de los entrevistados, fue inesperada (Taller 2014a). Falla (entrevista 2014), por ejemplo, admite que el partido

[S]obrevivor[ó] el momento político de la constituyente, en el sentido de que era algo nacional. [...] Se nos olvidaba que lo local y lo regional tiene unas identidades propias que no entran dentro del concierto nacional y entonces nos cogió de sorpresa, en el sentido de que comienza la arremetida paramilitar, el asesinato de los compañeros y entonces quedamos por fuera de los Montes de María.

Al hacerlo, Falla plantea implícitamente la pregunta sobre el papel del gobierno nacional que, de alguna manera, se mostró incapaz de frenar los ataques a desmovilizados y candidatos políticos, a pesar de que el tema de la seguridad y las garantías había sido un punto importante de la agenda de negociación. Desde el punto de vista del antiguo PRT, la respuesta del Estado siempre ha sido “débil” (CORPADEC 2000, 4) - Arrieta (2006) destaca incluso un incumplimiento gubernamental de los acuerdos. En esta línea de pensamiento, representantes del PRT compartieron las conclusiones de la conferencia de la primera asamblea nacional de la Unión Temporal Acción

³⁴ La iniciativa de fundar la EPS Mutual Montes de María, que a mitad de los años 90 contó con más de 150.000 afiliados, surgió de desmovilizados del PRT.

Humanitaria para la Paz (Asopropaz) realizada en el 2005, en la que hubo una amplia participación de las diferentes ONG nacidas de los procesos de desmovilización de los años 90,³⁵ la cual destacó, además de unos “serios vacíos estatales y gubernamentales para garantizar la seguridad”, la evaluación de que “el Estado, frente a las violaciones registradas, no ha cumplido con su deber de garantía, no ha brindado la suficiente seguridad y ha permitido el imperio local de los diversos grupos armados” (FUCUDE & ASOPROPAZ 2006, 361).

Otros entrevistados van incluso más allá y resaltan no sólo una ausencia de apoyo estatal, sino que apuntan directamente a agentes del Estado involucrados en la campaña violenta (Urueta, entrevista 2014a) - una acusación que asimismo está respaldada por testimonios de paramilitares desmovilizados (El Tiempo 2008) y académicos (Villarraga 2006, 58ss).

En resumen, la campaña violenta contra desmovilizados del PRT y otros grupos insurgentes reveló varias limitaciones del programa de reinserción de la década de 1990, en especial respecto al componente de protección. Al concentrar el esquema de seguridad principalmente en los líderes públicos más visibles de la CRS, del EPL, M-19, MAQL y PRT, sus bases y los miembros de bajo rango, a menudo estigmatizados ya sea como simpatizantes de la guerrilla (por parte del ejército y paramilitares), o como traidores de la revolución (por parte del ELN y las FARC), se fueron quedando sin protección. Aunque el gobierno nacional, afectado por la crisis política de mediados de la década de 1990 y por el acelerado conflicto armado con los grupos guerrilleros restantes, en general, respetó los acuerdos y recibió las denuncias, esta situación no provocó un reajuste del programa (Villarraga 2006, 58ss). A pesar de que los miembros del PRT, de acuerdo con los puntos acordados en la negociación de paz, podían participar sin restricciones legales en elecciones nacionales y regionales, la realidad vivida en departamentos como Bolívar y Sucre, ambos con una cultura política violenta y excluyente promovida por las élites regionales, llevó a que esta participación política fuera más que todo un peligro para la vida de aquellos que deseaban luchar por la vía legal contra las injusticias sociales y la exclusión política.

6 Conclusión

Aunque la proyección de grupos insurgentes generalmente es nacional, su desarrollo, sus bases sociales, su área de operación y, por ende, el impacto de los mismos es con frecuencia regional. No obstante, y debido a su enfoque, las negociaciones de paz de grupos alzados en armas se centran normalmente en el gobierno nacional, como contraparte del diálogo. Ya sea por decisión del mismo grupo insurgente o por dictamen del gobierno nacional, tal diseño, a menudo, no tiene en cuenta las características, lógicas y relaciones de poder de las regiones – un hecho que, en últimas, puede complicar una aceptación amplia de los acuerdos, llevar a problemas de implementación y provocar rechazo por parte de actores excluidos – en fin: conducir a una paz incompleta.

El caso del PRT es una de las mejores muestras de todo lo anterior. Si bien el partido había intentado incluir cuestiones específicas (de la Costa Atlántica) en la agenda y de vincular las autoridades locales al proceso, el rechazo de esta propuesta por el gobierno nacional, junto con el desinterés de gran parte de las mismas elites regionales, impidió finalmente un encuentro y una reconciliación entre los excluidos y los excluyentes de siempre. Al menos para muchos entrevistados del PRT es claro que esta limitación, entre otros factores, produjo la campaña violenta en contra de los desmovilizados, ordenado y liderado por las élites tradicionales, obstaculizó la implementación de los acuerdos y destruyó así la posibilidad de una paz verdadera en la zona. Es por esto, que para Flórez (2014b), el proceso de paz entre el PRT y el gobierno nacional presentó sobre todo una oportunidad perdida. Según el antiguo dirigente del partido, la inclusión de factores y actores del nivel regional no se vuelve un desafío sino que es la clave para una implementación exitosa.

³⁵ ASOPROPAZ fue una entidad conformada por más de mil desmovilizados de los procesos de paz de los años 1990.

Bibliografía

- Aguilar, Mario** 2013. Un pacto parcial de paz: La negociación con el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT (1990-1991), en: Regalado, Roberto (ed.). Insurgencias, diálogo y negociaciones: Centroamérica, Chiapas y Colombia. México D.F.: Ocean Sur, 125-157.
- Archila Neira, Mauricio** 2008. El maoísmo en Colombia: La enfermedad juvenil del marxismo-leninismo, en: Controversia, 190, 147-191.
- Arrieta, Robinson** 2006. Experiencias en lo político y en lo social: Montes de María, en: Villarraga, Álvaro (ed.). La reinserción en Colombia: Experiencias, crisis humanitaria y política pública. Bogotá: FUCUDE, 235-238.
- Dirección General para la Reinserción** 2000. Huellas de paz: Los desmovilizados y su participación en los escenarios de elección popular: Balance 1990-2000. Santa Fe de Bogotá: Ministerio del Interior.
- FUCUDE & ASOPROPAZ** 2006. Elementos de diagnóstico, casos de violaciones e infracciones 1989-2005, en: Villarraga, Álvaro (ed.). La Reinserción en Colombia: Experiencias, crisis humanitaria y política pública. Bogotá: FUCUDE, 68ss.
- García Durán, Mauricio** 1992. De la Uribe a Tlaxcala: Procesos de paz. Santafé de Bogotá, D.C.: CINEP.
- González, Fernán** 2014. Configuración regional y violencia: A modo de introducción, en: González, Fernán (ed.). Territorio y conflicto en la costa caribe. Bogotá: Odecofi – CINEP, 7-40.
- Hernández, Milton** 1993. La unidad revolucionaria: Utopía y realidad. Colombia, Ediciones Colombia Viva.
- Hernández, Neila** 2006. La reinserción, los Derechos Humanos y la promoción de la paz y la convivencia: Sucre, en: Villarraga, Álvaro (ed.). La reinserción en Colombia: Experiencias, crisis humanitaria y política pública. Bogotá: FUCUDE, 168-180.
- Isaza, Cecilia** 1993. Los caminos entre la guerra y la paz. Santafé de Bogotá, D.C.: Fondo editorial para la paz.
- Jiménez Absalón** 2003. Democracia en tiempos de crisis 1949-1994. Bogotá D.C.: Planeta.
- Medina, Medófilo y Efraín Sánchez** 2003. Tiempos de paz acuerdos en Colombia 1902-1994. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Núñez, José** 1992. Borradores y esbozos de programas, en: Revista Contradicción, 10, 5-36.
- Porras Mendoza, Eduardo** 2014. Conflictos, violencias y resistencias en los Montes de María: Un análisis de temporalidad extendida, en: González, Fernán (ed.). Territorio y conflicto en la costa caribe. Bogotá: Odecofi – CINEP, 331-386.
- Restrepo Restrepo, Andrés & Marly Contreras Rodríguez** 2000. Flor de Abril: La Corriente de Renovación Socialista: De las armas a la lucha política legal. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Villarraga, Álvaro & Nelson Plazas** 1994. Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL. Bogotá: Fondo Editorial para la Paz, Fundación Progresar.
- Villarraga Sarmiento, Álvaro** 2006. Procesos de paz, reinserción y crisis humanitaria, En: Villarraga Sarmiento, Álvaro (ed.). La reinserción en Colombia: Experiencias, crisis humanitaria y política pública. Bogotá: FUCUDE, 17-67.
- Villarraga Sarmiento, Álvaro** 2009. Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19. Tomo II, Bogotá: Gente Nueva Editorial.
- Villarraga Sarmiento, Álvaro** 2013. Procesos de paz y tránsito de grupos alzados en armas a nuevos movimientos políticos, en: Controversia, 200, 17-75.
- Zuluaga Nieto, Jaime** 1999. De guerrillas a movimientos políticos: Análisis de la experiencia colombiana: El caso del M-19, en: Peñaranda, Ricardo / Guerrero, Javier (ed.). De las armas a la política. Bogotá: IEPRI – Tercer Mundo Editores, 1-74.

Notas de prensa

El Herald (1990, noviembre 21). El PRT convoca cumbre regional de paz.

El Tiempo (1991, enero 24). El PRT se lanzará el domingo como nuevo partido político. En www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-14241

El Tiempo (2008, 29 de mayo). Ex 'paras' destapan vínculos con Infantería de Marina y Policía. En www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4215913

Verdad Abierta a. El paramilitarismo en Sucre, un proyecto armado por su clase política. En www.verdadabierta.com/victimarios/845-el-paramilitarismo-en-sucre-un-proyecto-armado-por-su-clase-politica

Verdad Abierta b. 'Javier': De guía de soldados, a 'para', a bacrim. En www.verdadabierta.com/victimarios/3349-javier-de-guia-de-soldados-a-para-a-bacrim

Fuentes primarias

CORPADEC 1998. Cuadernos. Enero 1998.

CORPADEC 2000. Cuadernos: A diez años... ¿Cielo o infierno? Abril 2000.

CORPADEC 2000. Área Mujer.

Gobierno nacional, EPL, MAQL, PRT 1990. Comunicado conjunto: La abrumadora mayoría logró convocar una Asamblea Nacional Constituyente popular y soberana. 4.6.1990. En: Villarraga Sarmiento, Álvaro (ed.). Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19. Tomo II, Bogotá: Gente Nueva Editorial. 380.

PRT 1990a. Carta del PRT a los promotores del movimiento político democrático: Sin consenso en la CNGSB buscamos un acuerdo nacional por la paz y una alternativa política. 15.4.1990. En: Villarraga Sarmiento, Álvaro (ed.). Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19. Tomo II, Bogotá: Gente Nueva Editorial. 371-373.

PRT 1990b. Carta del PRT al gobierno nacional: La Asamblea Nacional Constituyente es la oportunidad histórica y llama a pactar soluciones. 11.5.1990. En: Villarraga Sarmiento, Álvaro (ed.). Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19. Tomo II, Bogotá: Gente Nueva Editorial. 373-374.

PRT 1990d. Acta de la reunión entre el gobierno nacional y el PRT. La Hoya (San Juan Nepomuceno) 8.5.1990. En: Villarraga Sarmiento, Álvaro (ed.). Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19. Tomo II, Bogotá: Gente Nueva Editorial. 388-390.

PRT 1990c. Declaración de la reunión de alcaldes de Sucre y Bolívar con el PRT, la Haya, San Juan de Nepomuceno de Bolívar 8.15.1990. En: Villarraga Sarmiento, Álvaro (ed.). Biblioteca de la paz – 1990-1994: Acuerdos con el EPL, PRT, MAQL y CRS: Diálogos con la CGSB. Tomo III, Bogotá: Gente Nueva Editorial. 177.

Entrevistas

Astolfo (Antiguo miembro del PRT y promotor del proyecto político en la Costa). Cartagena, Colombia, 2014.

Barrios, Gabriel (Antiguo dirigente de la ANUC y del PRT, ex concejal de San Juan de Nepomuceno). Bogotá, Colombia, 2014.

Cienfuegos, Alberto (Antiguo miembro del PRT). Bogotá, Colombia, 2014.

Cuello, Rafael (Antiguo miembro del PRT y sindicalista). Bogotá, Colombia, 2014.

Del Rio, Fernando (Antiguo miembro del PRT y director de CORPADEC). Bogotá, Colombia, 2014a.

Del Rio, Fernando (Antiguo miembro del PRT y director de CORPADEC). Bogotá, Colombia, 2014b.

Falla, Ernesto (Antiguo miembro del PRT e integrante del equipo negociador). Bogotá, Colombia, 2014.

Fernández, Arcecio (Antiguo miembro del Secretariado). Bogotá, Colombia, 2014.

Flórez, Enrique (Antiguo miembro del Secretariado del PRT, integrante del equipo negociador y ADM-19 candidato al Senado). Bogotá, Colombia, 2013.

Flórez, Enrique (Antiguo miembro del Secretariado del PRT, integrante del equipo negociador y ADM-19 candidato al Senado). Bogotá, Colombia, 2014a.

Flórez, Enrique (Antiguo miembro del Secretariado del PRT, integrante del equipo negociador y ADM-19 candidato al Senado). Bogotá, Colombia, 2014b.

Ortiz, José Matías (Ex miembro del Secretariado, integrante del equipo negociador, constituyente y ex Senador). Barranquilla, Colombia, 2014.

Tobón, Gabriel (Antiguo miembro del Secretariado). Bogotá, Colombia, 2014.

Urueta, Jorge (Antiguo miembro del PRT y ex concejal de Barranquilla). Bogotá, Colombia, 2014a.

Urueta, Jorge (Antiguo miembro del PRT y ex concejal de Barranquilla). Bogotá, Colombia, 2014b.

Zambrano, Carlos (Antiguo miembro del PRT y ex alcalde de Baranoa). Baranoa, Colombia, 2014.

Talleres

Taller 2014a, febrero 8, Bogotá.

Taller 2014b, febrero 17, Ovejas.

Taller 2014c, mayo 24, Bogotá.